



Ley 2014 de
2019

Nuevas medidas anti-
corrupción

Law 2014 de
2019

New anti-corruption
measures





El 30 de diciembre de 2019 se promulgó la ley 2014 que busca endurecer las medidas de sanción efectiva frente a las personas naturales y compañías (así como sus vinculados económicos) que cometen delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. A continuación, presentamos un breve análisis de la norma y sus implicaciones legales más relevantes.

La norma introduce una modificación al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado colombiano con respecto a las personas que cometan actos de corrupción (que complementa y modifica las reformas que habían sido introducidas por la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1778 de 2016). En consecuencia, aunque se mantiene el supuesto de hecho que da lugar a la inhabilidad (i.e. ser declarado judicialmente responsable por delitos contra la administración pública, por delitos contemplados en tratados internacionales o ser sancionado administrativamente por soborno transnacional), la inhabilidad ya no tendrá un plazo de veinte (20) años, sino será de carácter permanente.

On December 30, 2019 Law 2014 was enacted, aiming to strengthen sanctions against entities and individuals (and their related parties) who commit crimes against public administration or State assets. Below, we present a brief analysis of the law and its most important legal implications.

This law introduces reforms with respect to the regime of prohibitions of contracting with Colombian governmental entities in relation to entities and individuals who commit corruption acts (which supplements and modifies legal reforms already introduced by Law 1474 of 2011 and Law 1778 of 2016). In consequence, although the factual assumption that lead to prohibition of contracting with the State (i.e. being declared criminally responsible by a judge regarding public administration crimes or felonies established in international treaties, or being declared administratively responsible of transnational bribery) remain unmodified, the prohibition will no longer be for a period of twenty (20) years, but permanently.



Adicionalmente, está inhabilidad se extenderá no solo a sociedades en que el condenado sea administrador o socio controlante, y a sus respectivas matrices y subordinadas (como ya estaba establecido anteriormente), sino también a los grupos empresariales de los que hagan parte dichas sociedades cuando la conducta delictiva haya sido una política de grupo. Así mismo se crean nuevas inhabilidades para sociedades objeto de suspensión temporal de personería jurídica y sociedades en la que sus administradores o socios controlantes hayan sido beneficiados con un principio de oportunidad sobre delitos contra la administración pública o contra el patrimonio del Estado.

Resaltamos que bajo la nueva regulación, el riesgo de contagio de la inhabilidad producido por condenas a administradores es bastante alto dado que podría afectar todos los negocios del grupo empresarial e incluso podría inhabilitar para contratar con el Estado a personas naturales y compañías de por vida.

Sin embargo, de la lectura de la norma surgen cuestionamientos que deben ser considerados como (i) qué hacer frente a la existencia de grupos empresariales no registrados, (ii) qué autoridad sería competente para determinar la existencia de una política de grupo criminal y (iii) cuál es la aplicación de la norma en el tiempo (surge la duda de si la inhabilidad puede aplicar respecto de situaciones ocurridas y/o consolidadas antes de la expedición de la ley).

El segundo cambio que introduce la Ley 2014 en este aspecto es que todas las inhabilidades aplicables para contratar con entidades del Estado, ahora se aplicarán a todos los negocios de contratación privada en el que se comprometan recursos públicos. Esta modificación puede extender las inhabilidades a incontables negocios en los

Additionally, this prohibition will be extended not only to companies in which the convicted individual is legal representative or director, and their respective parent and subsidiaries (as already established before), but also to corporate groups in which those companies are members when the criminal activity had been a group policy. Furthermore, new prohibitions for contracting with Colombian governmental entities are introduced, for companies whose legal existence has been suspended, and for companies in which their directors, legal representatives or controlling partners have entered into a deferred prosecution agreement in Colombia for crimes against public administration or against State assets.

It is important to highlight that under this new regulation, risk of contagion of the foregoing prohibitions triggered by convictions against administrators is fairly high, because it could seriously affect all the business of the corporate group as a whole, and even it could disqualify entities and individuals for contracting with the government forever.

However, there are some grey areas on the law that have to be considered, including (i) how to proceed in respect of unregistered corporate groups, (ii) which is the competent authority to determine the existence of a criminal group policy, and (iii) what is the application of the law over time (it arises the doubt of whether this law applies to facts occurred and/or consummated prior to its enactment).

The second change that Law 2014 of 2019 introduces in contractual matters is that all prohibitions of contracting with the State will also be applicable to private tenders in which public resources are involved. This reform may extend the prohibition to countless matters



que intervenga por ejemplo, el Banco de la República, compañías de economía mixta, empresas industriales y comerciales del estado, empresas de servicios públicos de naturaleza pública, entidades multilaterales actuando en representación de contratantes públicos, en negocios relacionados con los proyectos o transacciones del sector salud (especialmente con EPS), subcontrataciones estatales, etc. En consecuencia, a partir de la expedición de esta norma, las compañías deben analizar extensivamente el riesgo no solo frente a los contratos que tengan con entidades del Estado si no en todos aquellos contratos en los que intervengan recursos públicos.

Otro cambio importante de la norma, es el efecto de las inhabilidades sobrevinientes sobre contratos en curso. Anteriormente, el contratista inhabilitado podía escoger entre ceder el contrato a un tercero de su elección, previa autorización de la entidad contratante, o renunciar a la ejecución del contrato. De ahora en adelante, en los casos de inhabilidad producto de actos de corrupción, la entidad contratante contará con un nuevo poder exorbitante (o excepcional) que le permitirá ceder unilateralmente el contrato al tercero que ella misma decida sin lugar a indemnización de ningún tipo al contratista.

Aunque la inhabilidad aplica preventivamente desde la sentencia de primera instancia en los casos de sentencia penal condenatoria, la norma ha establecido que la cláusula pecuniaria del contrato estatal se podrá cobrar una vez se encuentre en firme y ejecutoriada la sentencia judicial que determina la responsabilidad por actos de corrupción. Vale la pena recordar que la Ley 1882 de 2018 estableció que la inhabilidad sobreviniente por actos de corrupción sí es considerada un incumplimiento grave al contrato por lo que debe proceder el cobro de la cláusula penal,

including businesses or transactions involving the Central Bank, mixed-economy companies (*empresas de economía mixta*), industrial and commercial State companies (*empresas industriales y comerciales del Estado*), public utilities companies, or multilateral entities (when acting on behalf of public contractors), businesses related to projects or transactions of the healthcare sector (especially with health insurers), subcontractors of government contractors, among others. As a result, as from the issuance of this law, companies should analyze extensively the risk, not only in respect of contracting with governmental entities, but also to all other agreements in which public resources may be involved.

Another important reform brought by this law is the effect of inabilities of contracting occurring on ongoing projects. Formerly, the disqualified contractor was required to either assign the contract to a third party chosen by itself, upon prior approval of the governmental entity, or renounce to the performance of the agreement. From now on, in cases of inabilities triggered by corruption, the contracting governmental entity will be afforded with a new "exorbitant faculty" allowing the government to assign unilaterally the contract to a third party chosen by the contracting entity, with no recognition of damages in favor of the disqualified contractor.

Although this inability takes place preventively as from the date of first instance conviction in criminal cases, the law has established that the penalty clause can only be collected with the issuance of a final conviction in the last instance. It is important to remark that Law 1882 of 2018 established that the occurrence of facts generating a prohibition for contracting with the State in ongoing projects are considered a serious breach of contract and in consequence, the penalty clause can be collected; in those cases in which the



e incluso en aquellos casos en que no se haya pactado, se debe penalizar con el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Un cambio que impacta las condiciones de reclusión de personas naturales, es la prohibición de la casa por cárcel para quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado.

Es altamente probable que algunos artículos de la norma sean demandados para su examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional.

En **Posse Herrera Ruiz** contamos con un equipo interdisciplinario que presta asesoría integral a nuestros clientes sobre esta norma y sus antecedentes, desde la perspectiva penal, corporativa, administrativa y de compliance y que les permitirá un entendimiento adecuado y razonable de la norma, así como a tomar decisiones estratégicas para proteger los negocios en curso.

En caso de tener cualquier duda o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros.

- José Alejandro Torres
josealejandro.torres@phrlegal.com
+57 1 325 7300 Ext. 8181
- Oscar Tutasaura
oscar.tutasaura@phrlegal.com
+57 1 325 7300 Ext. 7263
- Gabriel Sánchez
Gabriel.sanchez@phrlegal.com
+57 1 325 7300 Ext. 7241

penalty clause was not agreed contractually, the entity is nevertheless entitled to claim five percent (5%) of the contract value as penalty.

A change which affects the reclusion conditions of individuals is the prohibition of any house arrest benefit for those who commit crimes against public administration or those ones which affect State assets.

It is likely that constitutional actions are brought against articles of this law for subsequent review by the Constitutional Court.

Posse Herrera Ruiz has an interdisciplinary team which offers a comprehensive advisory to our clients related to this law and its backgrounds from a criminal, corporate, administrative, and compliance perspective which lead to an adequate and reasonable comprehension of the law. Additionally, our advisory will lead our clients to make strategic decisions to protect their ongoing business.

Should you have any doubt or inquiry, please do not hesitate to contact us.

- José Alejandro Torres
josealejandro.torres@phrlegal.com
+57 1 325 7300 Ext. 8181
- Oscar Tutasaura
oscar.tutasaura@phrlegal.com
+57 1 325 7300 Ext. 7263
- Gabriel Sánchez
Gabriel.sanchez@phrlegal.com
+57 1 325 7300 Ext. 7241

